

NOMENCLATURA : 1. [40] SENTENCIA.
JUZGADO : 2° JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE ANTOFAGASTA.
CAUSA ROL : C-4118-2019.
CARATULADO : POOL/COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.
MATERIA : ORDINARIO MAYOR CUANTÍA. INDEMNIZACIÓN DE
PERJUICIOS
CÓDIGO : [I03A]
DEMANDANTE 1 : ISABEL MARGARITA POOL BALTRA
R.U.T. : 7.998.895-2
DEMANDANTE 2 : MIRIAN DEL CARMEN POOL BALTRA
R.U.T. : 7.999.249-6
DEMANDANTE 3 : ARACELLY DE LOURDES POOL BALTRA
R.U.T. : 8.024.512-2
DEMANDANTE 4 : JUANA LUISA POOL BALTRA
R.U.T. : 9.086.500-5
DEMANDANTE 5 : VLADIMIR LEONARDO POOL BALTRA
R.U.T. : 9.621.650-5
DEMANDANTE 6 : JUAN CARLOS POOL BALTRA
R.U.T. : 9.513.679-6
DEMANDADO : COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.
R.U.T. : 76.411.321-7
FECHA INICIO : 02.08.2019

Antofagasta, a veintiocho de junio del año dos mil veintidós.

VISTOS:

Que a folio 01, comparece don **Miguel Zepeda Pinto**, Abogado, con domicilio en calle Sucre 220, oficina 405, Antofagasta, en representación de **Isabel Margarita Pool Baltra**, domiciliada en calle Latorre N°542, Mejillones; **Mirian del Carmen Pool Baltra**, domiciliada en calle Caupolicán N°105, Población El Peñón, Coquimbo; **Aracelly de Lourdes Pool Baltra**, domiciliada en calle Bellavista N°3762, casa 7, Antofagasta; **Juana Luisa Pool Baltra**,



domiciliada en calle Pisagua N°554, Antofagasta; **Vladimir Leonardo Pool Baltra**, domiciliado en Pasaje Las Parinas N°2383, Calama y, de don **Juan Carlos Pool Baltra**, domiciliado en Pasaje Chuquin N°960, Villa Los Yacimientos, Calama, quien de conformidad a lo dispuesto en los artículos 2314 y siguientes del Código Civil, artículo 139 de la Ley General de Servicios Eléctricos y artículo 107 del Decreto Supremo N°327 del Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos, deduce demanda de indemnización de perjuicios por daño emergente y daño moral, en contra de la empresa **Compañía General de Electricidad o "CGE"**, RUT **76.411.321-7**, del giro de su denominación, representada por don **Cristián Gómez Díaz**, Gerente Zonal, con domicilio en calle Pedro Aguirre Cerda N°5558, Antofagasta.

Funda su demanda, en el hecho de que sus representados son copropietarios del inmueble ubicado en el Pasaje Angamos N°940 de la comuna de Mejillones, el cual se encuentra inscrito a fojas 183, N°178; y a fojas 205, N°198, ambas del Registro de Propiedad del año 2019, del Conservador de Bienes Raíces de Mejillones, conforme daría cuenta el correspondiente certificado de Hipotecas, Gravámenes, Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar; no afectándole gravamen alguno, por no presentar inscripciones vigentes que limiten el dominio.

Agrega que, con fecha 20 de abril del 2019, aproximadamente a las 12:00 horas, en la comuna de Mejillones, por efecto de una falla en el sistema de suministro eléctrico domiciliario, consistente en un aumento y oscilación brusca del voltaje de energía eléctrica o corriente eléctrica, proveniente de un poste del cual salían chispas de los cables del tendido eléctrico, se produjo un grave incendio en el domicilio de propiedad de sus representados ubicado en Pasaje Angamos



N°940, de la comuna de Mejillones y que, conforme da cuenta el Informe de Investigación de Incendio N° INC 005/2019, de fecha 3 de Mayo de 2019, elaborado por el Departamento de Estudios Técnicos del Cuerpo de Bomberos de Mejillones, remitido a la Fiscalía Local de la misma ciudad, mediante investigación realizada por el Comandante don Pedro Rojas Vargas, se pudo determinar técnica y objetivamente cuales fueron los factores circunstanciales que dieron origen al siniestro, al señalar en el precitado informe que, a las 12:03 horas del día sábado 20 de abril de 2019, la Central de Alarmas del Cuerpo de Bomberos de Mejillones recepciona un llamado telefónico, en el cual solicitaban la presencia de Bomberos en el Pasaje Angamos N°934, ya que se desarrollaba un incendio, despachándose de inmediato mediante protocolo de comunicaciones las unidades B-1, B-2 y B-3 (carro bomba), además de la unidad Z-3 (carro aljibe), a cuya llegada al lugar del siniestro, se constató la veracidad de la información, observando gran cantidad de humo y llamas abiertas que salían de forma violenta desde la casa habitación, procediendo por orden del Comandante de Bomberos, a declarar segunda alarma de incendio con el objetivo de despachar más unidades y personal al lugar del incendio por existir gran peligro de propagación a las viviendas de ambos costados y parte trasera.

Señala que, se solicitó la presencia del personal de la empresa eléctrica para verificar la ausencia de energía, quienes indicaron que el sector se encontraba sin suministro, debido a una falla presentada minutos antes en el mismo sector.

Refiere que, el informe estableció que el incendio se inició en el centro de inmueble sector de living, que a un costado de la pared de material sólido se encontraba un mueble de madera, sobre el cual estaba un equipo de música,



el cual se encontraba conectado a la red de electricidad, determinándose que el punto de origen, en el cual se encontraba el equipo de música, recibió una fuente de calor interna. El fuego se desplazó siguiendo varias direcciones provocando un efecto de gasificación de los enseres del inmueble, desprendiendo calor, bastante humo y llamas incandescentes.

Sostiene que, quedó esclarecido que los vecinos manifestaron que minutos antes, la gran mayoría de los habitantes del Pasaje Sargento Aldea y Pasaje Angamos desenchufaron sus aparatos eléctricos, debido a una falla de un poste de suministro eléctrico, del cual salían chispas de los cables, provocando que la tensión de energía fuera oscilante, aumentando y bajando de forma brusca la energía o electricidad. Confirmando el citado informe que, el denuncia antes mencionado por los vecinos de los Pasajes Sargento Aldea y Pasaje Angamos, se pudo constatar su veracidad, debido a que siendo la 11:31 horas, fue despachada la Unidad B-1 (carro de bomba) al Pasaje Sargento Aldea, atendiendo un llamado por motivo de un poste del cual salían chispas y caída de cables eléctricos, dónde el oficial a cargo se comunica vía radial con la Central de Bomberos, para gestionar la concurrencia del personal de CGE para efectuar los trabajos pertinentes en el poste que presentaba fallas. Concluyendo el Informe de Investigación de Incendio, que el inmueble corresponde a una casa habitación de un piso, de material mixto, la cual se encontraba sin sus moradores al momento del siniestro, los cuales se encontraban por motivos personales en la ciudad de Antofagasta, que dicho inmueble cuenta efectivamente con suministro eléctrico vigente desde el empalme del tendido eléctrico, estableciéndose que el incendio tuvo un solo punto de origen, localizado en un



equipo electrónico de música, el cual se encontraba sobre una mesa de madera ubicada junto a una pared en el sector de living, y que la fuente de calor generadora de la ignición del incendio, quedó determinada por un alza de voltaje, la cual afectó al equipo de música, y que dicha alza de voltaje en el sistema eléctrico de los Pasajes Sargento Aldea y Pasaje Angamos, se debió a una falla en el tendido eléctrico, factor para provocar el siniestro. Que de acuerdo a la información de vecinos, varios domicilios presentaron desperfectos en sus aparatos eléctricos debido al alza de voltaje, y que como medida de protección ellos desconectaron sus aparatos del sistema eléctrico.

Hace presente que, el citado informe presenta un error en cuanto a la numeración del inmueble siniestrado, error que fue corregido por parte del Comandante del Cuerpo de Bomberos de Mejillones, don Pedro Rojas Vargas, mediante oficio N°017/2019 dirigido a la Fiscalía Local de Mejillones, dando respuesta a lo solicitado por esta, aclarando en el numeral uno (1.-), que el Informe de Investigación de Incendio tiene un error en la dirección de la casa siniestrada, dice Pasaje Angamos N°934, correspondiendo a la dirección de Pasaje Angamos N°940, el cual, según las fotografías contenidas en el mismo informe, sufrió pérdida total en toda su estructura construida de 184 metros cuadrados, quedando en estado de ruina total e inhabitable por el siniestro sufrido. Inmueble que se explotó comercialmente desde el año 1993, bajo el giro de casa de pensión y alojamiento a los trabajadores de empresas que han operado en la comuna de Mejillones, razón por la cual se encontraba totalmente remodelado y preparado para alojar pasajeros, contando con numerosas habitaciones y dos comedores para dicha actividad.



En cuanto al derecho, señala que para determinar si concurren los requisitos para establecer la obligación de indemnizar por parte de la demandada, el artículo 2314 del Código Civil prescribe que el que ha cometido un delito o cuasidelito que inferido daño a otro, es obligado a la indemnización; sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito. Que dichos requisitos de la denomina responsabilidad extracontractual sería: a) Acción u omisión; b) Dolo; c) Daño o perjuicio; d) Relación causa; e) Capacidad delictual o cuasidelictual.

En cuanto al primer requisito, señala que es la acción, o en su caso, la omisión de un deber exigible; acción u omisión, como un comportamiento que va en contra del ordenamiento jurídico, contrario a la ley, procediendo a citar a don Enrique Barros Bourie, en su obra Tratado de responsabilidad extracontractual, Editorial Jurídica de Chile, Primera Edición, pp.62 y siguientes). Luego, en lo que respecta al dolo o culpa, se debe estar en presencia de una acción u omisión voluntaria antijurídica, es decir, con infracción a la normativa legal y reglamentaria, o a la falta de la debida diligencia y cuidado, culpa que se verifica de forma especial en la conducta omisiva de la demandada, ya que ésta no mantuvo su rol que por imperativo legal recibe el calificativo de garante y fiscalizador, propio de la actividad que de por sí es riesgosa y conlleva un peligro.

En lo que respecta a la responsabilidad de la demandada, cita el artículo 139 de la Ley General de Servicios Eléctricos, ubicado en el Título IV de la Ley "De la explotación de los Servicios Eléctricos y del Suministro", de la cual se desprende que la obligación de fiscalización que debe asumir el concesionario, deriva, de la normativa legal y reglamentaria vigente, y, al efecto,



la ley sin distinción entre instalaciones propias del concesionario o particulares, imponiéndoles el deber de mantenerlas en buen estado, precisamente para evitar cualquier peligro o riesgo respecto de las cosas o las personas, y, por ello, le entrega la prerrogativa de "inspeccionar" las instalaciones, conforme establece el artículo 107 del Decreto Supremo N°327, Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos, y, dicha obligación, incumplida por la demandada, era de suyo realizable y exigible, por cuanto, las instalaciones eléctricas se encuentran emplazadas en una vía pública o de uso público como lo es el tendido eléctrico de suministro domiciliario. Requisitos todos, que se verificarán en la conducta del agente, omisión culposa al no cumplir su obligación legal de mantener las instalaciones en buen estado y en condiciones de evitar peligro para las personas o cosas, de acuerdo a las disposiciones reglamentarias correspondientes.

Luego, en lo que respecta al nexo de causalidad, para configurar el régimen de responsabilidad extracontractual, debe existir una clara y necesaria conexión entre el hecho y el daño causado que, desde la perspectiva factual, si se elimina la conducta omisiva del demandado, no puede explicarse la producción del incendio y los consecuentes daños, ya que de haberse verificado una correcta y oportuna mantención de las instalaciones eléctricas y control debido del alza del voltaje del suministro eléctrico, el incendio del inmueble, así como los perjuicios verificados en los electrodomésticos de los demás propietarios del sector no se hubiere producido. Sin embargo, esta omisión culposa, produjo efectivamente daños gravísimos a sus representados, verificándose una clara conexión entre la omisión y los daños o perjuicios, procediendo a citar un extracto de lo



resuelto por la Corte Suprema, Primera Sala, en sentencia de fecha 2 de abril de 2015, Casación Fondo, autos Rol N°21.301-2014.

En cuanto a los daños e indemnizaciones, primeramente se refiere al daño emergente, el cual está representado por la efectiva pérdida patrimonial que ha sufrido su parte, como consecuencia de las conductas omisivas culposas de la demandada. Atendido el hecho que el inmueble de propiedad de sus representados presenta efectivamente pérdida total en su estructura, tomando en cuenta que dicho inmueble presente en el comercio inmobiliario por su ubicación estratégica en Mejillones un precio elevado; demanda indemnización por concepto de daño emergente la suma de \$300.000.000.-, puesto que la reconstrucción del mismo importa sin lugar a dudas un costo muy elevado, y dicha suma se condice con los precios de mercado, sumado el largo tiempo que deberá transcurrir desde la verificación del siniestro, a la fecha en que se encuentre construido nuevamente, lo que importa un agravamiento del perjuicio y pérdida efectiva. En segundo lugar, en lo que se refiere al daño extrapatrimonial, previa cita de un extracto de la obra denominada Tratado de Responsabilidad Extracontractual, Enrique Barros Bourie, Editorial Jurídica de Chile, Primera Edición, pp. 231 y siguiente, señala que el mismo, representado por la aflicción, angustia, malestar espiritual y moral que ha padecido cada uno de los demandantes, hermanos todos, unidos en una familia trabajadora y de mucho esfuerzo, que ha visto siniestrado la casa que ha sido su hogar, su refugio, sus recuerdos y alegrías, conseguido con toda una vida de sacrificio de sus padres ya fallecidos, demandan por indemnización de daño moral prudencialmente la suma de \$30.000.000.-, para cada uno de los demandantes.



Solicita tener por interpuesta demanda de indemnización de perjuicios en contra de Compañía General de electricidad o CGE, acogerla en todas sus partes, condenándola al pago de la indemnización por daño emergente por la suma de \$300.000.000.-, y al pago de indemnización por daño moral por la suma total del \$180.000.000.-, más intereses y reajustes, o a la suma que este tribunal estime de justicia y equidad, con expresa condena en costas.

Que, a folio 10 del presente cuaderno, comparece don **Francisco Leppes López**, Abogado, en representación de la parte demandada **Compañía General de Electricidad S.A.**, quien interpone las excepciones dilatorias de los numerales 6 y 4 del artículo 303 del Código de Procedimiento Civil, resueltas a folio 07 del cuaderno "1.1 Excepciones Dilatorias", prosperando únicamente la primera de ellas, en virtud de la cual la parte demandante procedió a subsanar el vicio respectivo a folio 14 del cuaderno principal.

Luego, a folio 16 la parte demandada, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 309 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, contesta la demanda deducida en autos y solicita su rechazo, con costas.

Previa referencia a las peticiones contenidas en el libelo, señala que Elecda, hoy CGE S.A., es una empresa concesionaria de servicios de electricidad y su actividad, por consiguiente, se encuentra esencialmente regulada, por el DFL 4, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, publicado en el DO de 5 de febrero de 2007, modificado por la Ley 20.018, de 19 de mayo de 2005 y en el Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos, Decreto 327/1997, modificado por el Decreto Supremo 4/2008, procediendo a citar su artículo 1, artículo 1 del Reglamento, artículo 7 de la ley, para continuar



sosteniendo que CGE S.A., es la empresa distribuidora de energía eléctrica en la Región de Antofagasta, que abastece a los clientes de las comunas de Antofagasta, Taltal, Sierra Gorda, Mejillones, Calama y Tocopilla. Siendo, uno de los principales grupos energéticos del país, con presencia en casi todas las regiones de Chile y con más de 100 años de experiencia en el negocio de electricidad, estando obligada a prestar servicios de suministro eléctrico que reviste importancia para el análisis de la demanda deducida en autos. Cita los artículos 105, 107, 205 y 206 del citado reglamento, y niega y controvierte completamente que los hechos hayan acontecido de la manera que se expresa en la demanda, en particular, niega que los daños reclamados se deban a una insuficiente prestación del servicio de CGE S.A., o a una inadecuada instalación, que se pueda vincular causalmente con el incendio que afectó la propiedad de los demandantes.

Refiere que, en la demanda se indica muy vagamente que, como consecuencia del incumplimiento de una obligación de CGE S.A., es decir, por una falla en la prestación del servicio, pero el régimen en que se ha demandado es el de la responsabilidad aquiliana y que, existiendo un contrato celebrado entre las partes, aunque sea forzoso y, alegándose incumplimiento de una obligación, consistente en una falla en la prestación de servicio, el régimen en el que debe demandarse, es el de la responsabilidad contractual, de modo tal que la demanda, del modo propuesto no podrá prosperar. En subsidio, en el caso de no acoger tal defensa, analizará la pretendida causalidad que el actor reclama en la especie, desde la perspectiva de la culpa exclusiva de la víctima y, en subsidio de lo anterior, hará un análisis de los daños reclamados. En



subsidio de todo ello, pide la rebaja por el seguro pagado a los demandantes.

En lo relativo a que, en la especie no se ha demandado un régimen de responsabilidad contractual, indica que en el sistema chileno, coexisten dos regímenes de responsabilidad y, como explica Corral, la responsabilidad civil aparece vinculada esencialmente al daño que sufre una o más personas individualizables, y al deber que tiene alguien de repararlo o compensarlo con medios equivalentes, agregando que la imputación a una persona de la obligación de reparar un perjuicio es lo que constituye el contenido esencial del concepto de responsabilidad civil, criterio que ya bastante años atrás había adoptado el profesor Alessandri y que, nuestro Código Civil consagró la responsabilidad civil, separándola en aquella derivada del incumplimiento contractual y que la reguló como efecto de los contratos, denominada responsabilidad civil contractual; y, en oposición a ésta, la responsabilidad civil extracontractual, regulada entre las fuentes de las obligaciones, como delitos y cuasidelitos, siguiendo la nomenclatura que Pothier empleó para las viejas fuentes romanas de los *delicta* y los *quasi-exdelicta* de Justiniano (artículo 1437 en relación con el artículo 2284 del Código Civil), institución que, debido a su evolución y con una mayor precisión técnica, fue desarrollada por los hermanos Mazeaud, quienes expresan: *"Se divide la responsabilidad civil en dos ramas: de una parte, la responsabilidad delictual y cuasidelictual; y de la otra, la responsabilidad contractual. Sería más exacto, en verdad, distinguir de la responsabilidad contractual la responsabilidad extracontractual, cuyo ámbito es más vasto que el de la responsabilidad delictual y cuasidelictual"*. Mientras que en España, se define de manera muy similar la



responsabilidad extracontractual, citando los conceptos de Yzquierdo Tolsada y De Ángel Yáguez.

En consecuencia, lo primero que debe analizarse, es la existencia de un contrato, el que según nuestro Código Civil, es un acto por el que una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer. Al margen de la discusión doctrinaria relativa a dicho artículo, que considera irrelevante a efectos de la presente causa, si resulta importante destacar que, para el sistema chileno, el modelo contractual tiene indudable carácter obligatorio y no real: los contratos en Chile crean derechos personales y no reales, de modo que lo esencial de la definición es precisamente este último extremo: que entre las partes haya prestaciones que puedan ser consideradas obligaciones. Así las cosas, dado el modo que el mismo demandante parte del supuesto que dicha relación contractual existe, es un hecho pacífico que la demanda se funda, precisamente, en dicho contrato, en la medida que la falla de prestación sólo se puede fundar en él, y que, si bien es cierto que los demandantes aseveran en alguna parte de la demanda, que las partes no estaban vinculadas por contrato alguno, de la lectura de la fundamentación de la misma, se refleja todo lo contrario, estando frente a una relación contractual, por mucho que su categoría sea la de contrato forzoso. En la demanda se reconoce que el problema surge a propósito de la distribución de servicios eléctricos, encontrándose presente todos los elementos de un contrato: dos partes, vinculadas necesariamente, dado el carácter monopólico de la distribución de electricidad, una prestación principal, consistente en la provisión de servicios eléctricos y, una contraprestación, consistente en la suma de dinero que el cliente debe pagar por tales servicios. Cuyos efectos, son los propios de un contrato, es decir, genera derechos y



obligaciones para las partes. Y los efectos de dichas obligaciones se traducen en los propios de una relación contractual, a saber, el pago o cumplimiento obligacional y, en caso de incumplimiento, las herramientas de tutela del acreedor, no bastando, para que haya responsabilidad contractual, estar en presencia de un contrato, sino que además, debe tratarse de un incumplimiento contractual. En efecto, la indemnización de perjuicios se encuentra inserta en el régimen de responsabilidad contractual que el acreedor puede intentar contra el deudor. Según Domínguez, una aproximación más técnica permitirá situarse en el ámbito contractual, siempre que el perjuicio causado a la víctima no se hubiera producido, de no haberse encontrado ligado el responsable con el contrato, de dicho modo, al realizar una conducta dañosa, con ocasión del contrato, particularmente en la etapa de ejecución, incurre en responsabilidad contractual.

Sostiene que, el vínculo contractual y, dentro de él, el incumplimiento de la obligación, es el presupuesto causal fundamental para el evento dañoso provocado al deudor y, ante la pregunta ¿cuál es la obligación incumplida por su representada?, según el fundamento contenido en la demanda, su responsabilidad surge como consecuencia de haber incumplido un deber secundario de prestación: el deber de seguridad, en otras palabras, de acuerdo con los demandantes, el prestador de servicios eléctricos debe prestar sus servicios con seguridad (y velar por ella). La falla en dicha prestación, es decir, un servicio que juzgaría deficiente, haría nacer la responsabilidad civil.

Acto seguido, en el acápite relativo a la responsabilidad contractual excluye las normas de responsabilidad aquiliana. El juez no puede resolver de



acuerdo con el régimen que la víctima elija, señala que el vínculo contractual y, dentro de él, el incumplimiento de la obligación, es el presupuesto causal fundamental para el evento dañoso provocado al deudor. La responsabilidad contractual, en el sentido propio del término, queda circunscrita al incumplimiento de obligaciones derivadas de contratos. Y, como corolario lógico, delimitan su concepto a la reparación de los perjuicios compensatorios, correspondiendo el régimen común y supletorio el de responsabilidad aquiliana y, una segunda consecuencia, es que las reglas de responsabilidad contractual, excluyen la aplicación de las normas de responsabilidad extracontractual, pues no le cabe a la víctima, ni menos al juez, elegir libremente el régimen de responsabilidad. Pronunciándose en dicho sentido la Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia de fecha 13 de septiembre de 2012. Sentido similar, al fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción, de 5 de noviembre de 2012, cuyo extracto cita. Así como también se ha pronunciado la Corte Suprema, en la sentencia de 27 de diciembre del 2007, al desestimar un recurso de casación en el fondo, confirmando el criterio de los tribunales de fondo, en orden a que la responsabilidad contractual queda configurada por el incumplimiento contractual, no pudiendo dirigirse la pretensión de reparación por la vía aquiliana.

En subsidio, alega culpa exclusiva de la víctima como causa de exoneración de responsabilidad civil. En subsidio, rebaja de la indemnización, conforme al artículo 2330 del Código Civil. Al efecto, indica que, aparentemente, la cuestión de riesgos asumidos puede conectarse con las interferencias causales, pero es necesario hacer algunas precisiones. Como señala Infante, las concausas o causas concurrentes pueden clasificarse de la siguiente manera: a)



causalidad subsiguiente, cuando el hecho realizado por la persona es causa adecuada del hecho realizado por otra, como por ejemplo, cuando la negligencia del depositario da lugar al hurto de la cosa; b) causalidad complementaria, cuando actúan independientemente para producir el resultado o agravarlo, sin que exista lazo alguno entre ellas; c) causa cumulativa o concurrente o denominada por algunos, alternativa, cuando ambas actúan para producir el resultado, pero uno sólo habría bastado para desencadenarlo. Se trata de cursos causales independientes, de distinto origen, que concurren a la producción del evento, pero sólo uno de ellos hubiese bastado para producirlo. Además, indica que hay una diferencia de la causalidad alternativa o cumulativa con la denominada causalidad alternativa hipotética, pues mientras en la primera todas las condiciones actúan efectivamente en la producción del daño, en la última una de las causas permanece "hipotética". No hay concausas, sino alternatividad de cursos causales (INFANTE RUIZ, Francisco José, *La responsabilidad por daños: nexos de causalidad y "causas hipotéticas"*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, p. 23). Pero como indica De Cuevillas, no se trata de un problema de concausas o concurrencias de causas, porque debe distinguirse entre concausas y causa nueva. En la primera no hay interrupción del curso causal, sino que la responsabilidad sólo se atenúa. La causa nueva, totalmente desligada de la anterior, produce la ruptura del nexo causal. En el primer caso, en consecuencia, estaríamos en presencia de un genuino problema de compensación de culpas, mientras que en el segundo se trata de una cuestión de culpa exclusiva de la víctima o asunción de riesgos.

Que, a su juicio, en la especie, el conjunto de antecedentes configuran una causal de exoneración de



responsabilidad civil del empresario. Como indica Baraona, entre los elementos necesarios para determinar la existencia de una causa de exención, es necesaria la indagación de un conjunto de antecedentes.

En ambos casos, los demandantes han sido claros en que, el fundamento de la demanda, está en la vulneración del deber de seguridad en la prestación de los servicios que su representada debía prestarle. Y, desde el plano fáctico, afirma que, dado que el incendio se inició localizadamente en un lugar específico de la casa, es decir, a partir de un equipo de música enchufado, éste habría recibido un golpe de calor interno. Desde ahí deduce que dicho golpe de calor tendría que provenir de un funcionamiento defectuoso de las líneas de alta y baja tensión de su representada, que habría afectado al pasaje, agregando además que, esa sería la conclusión irrefutable, única y excluyente del informe de la Compañía de Bomberos que concurrió al lugar a sofocar las llamas, informe que, efectivamente concluye que el incendio se produjo por una falta de voltaje. Pero lo que la demandante ha omitido convenientemente, es que el apartado 5, página 10 de dicho informe también agrega, enfáticamente, "*Que los automáticos de protección de energía no operaron, que el automático del interior de la vivienda no se pudo precisar su capacidad de Amper debido a su destrucción por efecto del fuego*", agregándose que: "*el automático del medidor de la entrada de la vivienda estaba sobre dimensionado y que la tapa del medidor no contaba con su seguro, el cual solo puede ser removido por la empresa de distribución eléctrica*". Justamente, el interruptor general automático, o sus siglas correspondientes IGA, es un elemento que tiene la función de proteger la vivienda de posibles sobrecargas o cortocircuitos que se pueden producir en una instalación



eléctrica. Hablando de sobrecarga, en la técnica eléctrica, cuando la magnitud de la tensión ("voltaje") o corriente supera el valor preestablecido como normal (valor nominal) y que, comúnmente se originan por exceso de consumos en la instalación eléctrica. Automático o disyuntor que, pretende precisamente proteger a las personas, de daños en los muebles o de incendios, por lo que no deben ser manipulados, como ocurrió en la especie, siendo lo más grave, que de acuerdo al informe citado con premura por el propio demandante, el disyuntor externo era el manipulado, sin consentimiento, ni intervención de la Compañía a la que ahora se demanda. Inclusive la propiedad no contaba con la Recepción final definitiva de parte de la Dirección de Obras Municipales de la Ilustre Municipalidad de Mejillones, pues no contaba con todos los permisos entre ellos la Declaración de la instalación eléctrica interior, inscrita por el instalador autorizado en la S.E.C. Es decir, no existía casa alguna legalmente construida en el terreno.

En subsidio, en el evento improbable de considerar que las conductas de la actora no se traducen en una causa de exoneración, considera que concurren todos los elementos para configurar la compensación de culpas, contenida en el artículo 2330 del Código Civil, desde que puede considerarse que las víctimas han participado y se expusieron imprudentemente al perjuicio, al haber adoptado decisiones y conductas fuera del radio de control del demandado, por lo que la indemnización deberá ser proporcional y prudencialmente reducida.

Igualmente, en subsidio de las alegaciones de exoneración de responsabilidad civil, en el evento que el tribunal considere que procede en la especie la acción de indemnización de perjuicios, decidiendo la controversia



aplicando las reglas de la responsabilidad contractual y no extracontractual, y que no se estaría frente a un problema de culpa exclusiva de la víctima, existirían una serie de argumentos jurídicos que permite desvirtuar y rechazar las alegaciones de la contraria en relación con los daños, por lo que controvierte todos y cada uno de los hechos afirmados en la demanda relativos a los mismos, señalando que la contraria ha intentado la acción de perjuicios con una liviandad y falta de argumentación que sorprende, diciendo que el supuesto incumplimiento de su representada le ha causado daño emergente, que cifra nada menos que en el valor del inmueble y daño moral, cuya suma pide como un valor total, en globo, cuestión que niega ya que el inmueble nunca se explotó comercialmente ni mucho menos todos los demandantes vivían en dicha propiedad, olvidando que los daños requieren ciertos requisitos, aplicables en el régimen contractual, pero también en el ámbito extracontractual, daños que tienen que ser directos, a menos que se pacte lo contrario, ciertos a la época de ocurrencia del supuesto incumplimiento y que no pueden fundarse en suposiciones, supuestos, eventualidades. Olvidando igualmente la contraria, que si se tratase de un problema de responsabilidad contractual, como lo afirma la demandada en su contestación, el mismo artículo 1558 del Código Civil, que regula la valoración de los daños que debe hacer el juez, limita la indemnización a los daños directos previstos al tiempo de contratar. Dado que la contraria no ha alegado incumplimiento doloso, no puede regir la regla de valuación de daños imprevistos, por lo que la previbilidad constituye una seria limitación para los perjuicios que pretende reclamar.

Precisa que, un primer requisito para que existan perjuicios y menoscabos es que éstos sean directos, esto



es, consecuencia necesaria y directa de la acción supuestamente culposa de la parte demandada. El problema de la relación de causalidad, requisito de la responsabilidad civil, se encuentra vinculada con la noción del daño directo. Existe una relación causal cuando el hecho o la omisión, dolosa o culposa, es la causa directa y necesaria del daño, unánimemente afirmado por la doctrina. El daño debe ser una consecuencia directa y necesaria de un hecho imputable a una persona. Y ello porque, en nuestro sistema, la relación de causalidad no sólo determina quién debe responder de un hecho ilícito, sino que también determina la extensión de los daños que debe resarcirse. En el caso que nos ocupa, por las razones analizadas en el apartado anterior, para el caso que el Tribunal no acoja la pretensión de exoneración de responsabilidad civil, debe considerarse que los daños reclamados no son directos, porque el resultado dañoso no puede atribuírsele a su representada, constituyendo además, la indemnización solicitada, un menoscabo eventual, por cuanto los presupuestos de su apreciación constituyen meras hipótesis y expectativas.

En el mismo orden de ideas, esgrime que, si se considerase que el régimen es el contractual, no obstante a su primera alegación, se debe tener presente que, el artículo 1558 impone una limitación a la reparación del daño, pues en la especie, estaríamos frente a perjuicios que no están vinculados con el valor de la prestación y así mismo lo habría reconocido la contraria, denotando su esfuerzo por argumentar la diferencia entre daño extrínseco, pero directo, pues son hipotéticos daños que derivaría de la omisión de cumplimiento. Pero, aunque se considerara que los perjuicios reclamados por la contraria son directos y, en consecuencia, hay relación causal, la



contraría olvida completamente el análisis del segundo criterio normativo contenido en el artículo 1558, norma que limita la indemnización a los daños efectivamente previstos en el contrato o a aquellos que se pudieron prever al tiempo del contrato, siendo ese precisamente el problema con los perjuicios que se demandan, porque todos los menoscabos patrimoniales que alega, de ser previsible, lo son a la época del incumplimiento, pero en caso alguno a la época de celebración del contrato, por ejemplo, ¿cómo puede un hombre medio razonablemente prever al tiempo del contrato que los daños consistirían en la alteración de un dispositivo que perseguía proteger a la propia víctima?.

Acto seguido, cita un fallo de la Excma. Corte Suprema, de fecha 27 de octubre de 2010, Rol 2778-09, dónde se acogió el recurso de casación en el fondo respecto de la sentencia de segunda instancia que había pasado por alto la aplicación del artículo 1558.

En lo que respecta al daño moral, expone que se deberían aplicar las mismas razones jurídicas para rechazar la demanda del daño patrimonial, en término de no haber daño moral conectado causalmente con el incumplimiento de una obligación pactada causalmente. En efecto, los actores fundan el daño moral en hechos que o no tienen relación alguna con el contrato o que si están conectados, lo están de modo indirecto o mediato, no estando frente a víctimas completamente desamparada, engañada y arrastrada a unas consecuencias para ella del todo indeseadas, de cuyo relato se olvida que se ha vulnerado el más básico dispositivo destinado a impedir que todo el daño causado se produjera.

Sostiene que el daño moral no es previsible conforme al artículo 1558, empleando los mismos argumentos relativos al caso de los daños patrimoniales, cuestión que guarda completa relevancia, al punto que la doctrina entiende que,



como regla general, el contrato con prestaciones patrimoniales no puede dar lugar a indemnización por daño moral, a menos que las partes pudiesen preverlo al tiempo de la celebración. Y que, independiente de cómo se aleguen los perjuicios morales, desde hace bastante tiempo nuestra doctrina y jurisprudencia, al menos en el ámbito local, se han uniformado con relación a la prueba de los perjuicios extrapatrimoniales, siendo cuestiones bien distintas, por un lado, la naturaleza de este tipo de menoscabos, la valoración del quantum indemnizatorio, por otra, y la acreditación de los hechos o supuestos del menoscabo, no existiendo ninguna materia ni hechos en un proceso que tengan el carácter de indiscutibles y que por ello no necesiten probarse. El perjuicio moral, como categoría específica del daño, es de carácter normativo y los supuestos materiales de su construcción, del mismo modo que la culpa y los restantes elementos de la responsabilidad civil, deben ser acreditados. Especialmente porque, como se ha argumentado en la contestación, todo daño (incluido el moral) debe ser directo y, para ello, debe probarse que la cadena causal alegada se encuentra relacionada con la conducta que quiere atribuirse a su representada, debiendo los demandantes, demostrar que los hechos narrados son capaces de producir los perjuicios descritos en el acápite del daño moral y de la manera que se han descrito. Los sucesos ordinarios, extraproceso, no autorizan a las partes para dejar de allegar la prueba que diga relación con el daño alegado, pues, dentro de las normas que permiten al juez alterar la carga de la prueba, no se contemplan las presunciones judiciales, no autorizando al juez para elaborar una verdadera ficción de daño moral, dónde nuestra jurisprudencia se ha ido inclinando por la exigencia de la acreditación del daño moral, cita al



efecto, el fallo de la Excma. Corte Suprema, de fecha 3 de septiembre de 2009, Rol 1346-08, que acogió el recurso de casación en el fondo deducido contra el fallo de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, que había inferido el daño moral sólo con la demostración del vínculo parental. Agrega que, la Iltma. Corte de Apelaciones había concedido una indemnización de perjuicios derivados de la muerte del padre y del cónyuge, bastando para ello la prueba del parentesco. Cita igualmente, la sentencia de 28 de agosto de 2008, rol 2460.07, de la Excma. Corte Suprema que rechazó los recursos de casación en el fondo y en la forma deducidos, quedando a firme el pronunciamiento que había rechazado la demanda por daño moral al no haberse probado suficientemente éste; mismo criterio seguido por la Iltma. Corte de Apelación de Arica, sentencia de 24 de agosto de 2011, rol N°492-08.

Sobre el quantum indemnizatorio, como consecuencia de las supuestas lesiones a intereses extrapatrimoniales, traducidas en secuelas de la esfera psíquica, los demandantes piden la suma de \$30.000.000.-, para cada demandante, sin precisar en qué consistiría dicho daño moral y cuál sería el fundamento para una demanda uniforme, pidiendo indemnizaciones en globo, para menoscabos que se han descrito en forma confusa.

Destaca que, la indemnización por daño moral, jamás ha pretendido compensar a la víctima, atendida la naturaleza de los intereses tutelados, pero no es propia del ámbito extrapatrimonial, también existirían intereses patrimoniales, cuyo menoscabo no puede ser compensado. Siendo en el caso del perjuicio moral, el resarcimiento satisfactorio y no compensatorio, no significando en manera alguna que no exista criterio para fijar las sumas o quantum indemnizatorios, ni tampoco significar que éste



pueda estimarse arbitrariamente, por mucho que quede entregado a la prudencia del tribunal. Estando fijado, el quantum indemnizatorio, a factores objetivos de determinación y no a la libre opinión del juzgador ni de las partes. No resultando en el caso de autos, creíble, ni comprensible, configurar menoscabos a la integridad psíquica, de la magnitud y grado que describen los demandantes, sin perjuicio de la regla del artículo 1558 ya analizada, teniendo la indemnización solicitada un claro afán lucrativo.

Por último en el evento de rechazar todas las alegaciones y defensas opuestas, especialmente en el caso que se considere que debe otorgarse alguna indemnización en favor de los demandantes, debe descontarse la suma de 200 UF, que corresponden al pago del seguro y que fueron efectivamente pagado a los actores, toda vez que de no hacerlo, constituiría un enriquecimiento injusto para los demandantes.

Solicita tener por contestada la demanda, rechazarla en todas sus partes, con costas, acorde a los fundamentos de hecho y de Derecho que se han esgrimido. En subsidio, tener presente las alegaciones que impliquen una rebaja en la indemnización que se otorgue, por las razones y argumentos también invocados.

Consta a folio 18 del expediente digital que, la parte demandante evacuó el trámite de la réplica, haciendo una breve referencia a los argumentos expuestos por la parte demandante en su contestación relativos al régimen de responsabilidad que le asiste, para señalar que los mismos de nada le sirve para evadir la responsabilidad que le cabe respecto de sus representados, pues, conforme se señala claramente en el libelo de la demanda, la Doctrina ha explicado que en materia civil la responsabilidad del autor



consiste en el deber jurídico de reparar los daños o perjuicios que se producen con ocasión del incumplimiento de una obligación, siendo la obligación el deber de conducta tipificado en la ley, si tal obligación ha sido establecida en el contrato se rige por las reglas de responsabilidad contractual-cuyo no es el caso por no existir vínculo contractual alguno entre las partes en dicho sentido-, y si la obligación se encuentra consagrada en la ley se aplican las reglas de la responsabilidad extracontractual, distinguiendo en esta última, según Pablo Rodríguez Grez, entre responsabilidad legal, para el caso en que la ley en forma directa asigna el deber de conducta; delictual o cuasidelictual, para el caso en que la obligación deriva de ciertos estándares generales que imponen el deber de no causar daño a otro, y cuasicontractual, para el caso en que la obligación deriva de un hecho voluntario y no convencional, por lo que, se debe verificar, si el incumplimiento de la obligación, siendo la obligación el deber de conducta tipificado en la ley-, ha sido establecida en el contrato de suministro eléctrico, o por el contrario, si la obligación se encuentra en la ley.

Precisa que, de la simple lectura de la contestación de la demanda, se puede corroborar que la propia demandada declara expresa y voluntariamente, que CGE S.A., es una empresa concesionaria de servicios de electricidad y su actividad por consiguiente, se encuentra esencialmente regulada en el DFL 4, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, publicado en el DO de 5 de febrero de 2007, modificado por la Ley 20.018, de 19 de mayo de 2005 y en el Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos, Decreto 327/2009, modificado por el Decreto Supremo 4/2008,



resultando fundamental para establecer la responsabilidad de la demandada, lo dispuesto en el artículo 139 del Ley General de Servicios Eléctricos, el cual cita, por lo que no puede pretender la demandada, empresa concesionaria en cuanto su actividad y servicio se encuentra esencialmente regulada por ley, argumentar que la demanda no podrá prosperar atendido que el régimen de responsabilidad aplicable es la de tipo contractual, ya que la doctrina como la abundante jurisprudencia de nuestra Corte Suprema son contestes, en cuanto que las obligaciones consagradas en la ley, se rigen efectivamente por las reglas de responsabilidad civil extracontractual.

En cuanto a la alegación de la demandada, referente a la culpa exclusiva de su parte como exoneración de responsabilidad civil, la petición en subsidio de rebaja de la indemnización según el artículo 2330 del Código Civil, argumentando que desde un plano fáctico el incendio se inició a partir de un equipo de música enchufado en la casa el cual habría recibido un fuerte golpe de calor interno, añadiendo que el informe de Bomberos concluye que el incendio se produjo por un alza de voltaje, señalando que los automáticos de protección de energía no operaron, que el automático del interior de la vivienda no se pudo precisar su capacidad de Amper debido a su destrucción por efecto del fuego; que el automático del medidor de la entrada de la vivienda estaba sobredimensionado y que la tapa del medidor no contaba con su seguro, el cual sólo puede ser removido por la empresa eléctrica, para continuar argumentando según el precitado informe que, el disyuntor o automático externo era manipulado, sin consentimiento, ni intervención de la Compañía demandada; solicitando en subsidio compensación de culpas argumentando que las víctimas han participado y se expusieron imprudentemente al



perjuicio, al haber adoptado decisiones y conductas fuera del radio de control del demandado.

Aclara que, lo argumentado y aseverado por la demandada respecto del informe de Bomberos es falso, y que en ningún caso refiere que el automático externo era manipulado, y menos por sus representados y que, el hecho que la tapa del medidor no contara con su seguro, no da cuenta en modo alguno, que el seguro de la tapa del mismo haya sido retirado por sus representados, ninguna de ambas circunstancias fueron determinadas por el informe de Bomberos como factores del siniestro. En cambio, el citado informe si refiere, que los automáticos de protección de energía no operaron. Que el detectar el informe de Bomberos, el hecho que el medidor externo a la vivienda no contara con el seguro de su tapa, y el automático estuviese sobre dimensionado, ratifica y agrava aún más la responsabilidad de la demandada, por lo que la responsabilidad de la demandada en cuanto a la exoneración de responsabilidad civil que alega, y subsidiaria compensación de culpas, resultan evidentemente improcedentes, ya que incumplió abiertamente su obligación legal de fiscalización respecto de las instalaciones exteriores del inmueble de sus representados, esto es, el medidor y automáticos exteriores, los cuales de haber cumplido su obligación legal, no presentarían el automático sobredimensionado y falta del seguro de la tapa del medidor.

Luego, en mérito de lo antes expuesto, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, amplía y adiciona la acción formulada en la demanda, teniendo como fundamento para ello el incumplimiento de la demandada Compañía General de Electricidad S.A., respecto de su obligación legal de



fiscalización impuesta por el artículo 139 de la Ley General de Servicios Eléctricos.

Por último en cuando a la compensación de culpas, resulta inaudible y no tiene sustento alguno, toda vez que sus representados al momento del siniestro, y como bien refiere el informe de Bomberos, se encontraban en la ciudad de Antofagasta, por tanto, mal podrían haber adoptado conducta alguna o decisión, siendo lo normal mantener los electrodomésticos enchufados.

Que, a folio 20 la parte demandada evacuó el trámite de la réplica, reproduce todos y cada uno de los argumentos tanto fácticos como jurídicos expuestos previamente en la contestación de la demanda.

Señala que la demandante en su escrito de réplica, no aporta demasiado a la discusión respecto de los hechos tanto demandados como las alegaciones expuestas por su parte, insistiendo que el régimen jurídico aplicable es el extracontractual, apoyándose en el fallo de la Excelentísima Corte Suprema Rol 21.301-2014, sin embargo, de la sola lectura de lo resuelto por el Máximo Tribunal de Justicia, la cuestión debatida en este juicio fue, *"... específicamente la línea de tierra de un poste, ubicado en el sector rural de Paihuén, en el camino de servidumbre en un predio privado..."*, cuestión totalmente distinta a la que se ventila en autos, dónde sin lugar a dudas estaríamos en presencia de un contrato de prestación de servicios y no de una "Concesión".

Precisa que, en lo que dice relación al medidor externo, la culpa es exclusiva del demandante, pues el mismo se encuentra al interior del perímetro de la vivienda y "habiéndose removido el seguro de éste y estando sobredimensionado" no cabe duda que el mismo fue intervenido, tal como se indicó en la demanda, por lo cual



su argumento no puede ser falso. Igualmente, precisa que la contraria no se refirió a los hechos planteados por su parte en el escrito de contestación que decían relación a la falta de permisos (otorgados por la municipalidad) en especial el de instalaciones eléctricas interiores, ni del hecho de haber operado un seguro de incendio, ni mucho menos que la vivienda jamás fue explotada como pensión.

Reitera que, los daños no les constan y deberán acreditarse, debiendo el actor demostrar que estamos bajo un régimen extracontractual, que los actores hayan sufrido efectivamente daños y que exista relación de causalidad entre el actuar de su representada y los daños reclamados.

A folio 26, se llevó a efecto ante el Juez Suplente, don Homero Caldera Latorre, el comparendo de conciliación, el cual se celebró sólo con la asistencia del Abogado de la parte demandante y en rebeldía de la parte demandada. Llamadas las partes a conciliación esta no se produce atendida la inasistencia de la parte demandada.

Que, a folio 27, se recibió la causa a prueba, se fijaron los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, en contra de la cual ambas partes interpusieron recurso de reposición, resolviéndose los mismos a folio 37, acogiéndose, quedando en definitiva el auto de prueba tal como consta en la resolución del folio antes indicado, rindiéndose la que consta en autos.

A folio 93 se citó a las partes a oír sentencia, posteriormente, a folio 95 se decretó medida para mejor resolver, la que fue reiterada a folio 102 y se tuvo por cumplida parcialmente a folio 107, reingresando los autos para fallo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

I.- EN CUANTO A LA OBJECCIÓN DE DOCUMENTOS FORMULADA POR LA PARTE DEMANDANTE A FOLIO 50.



PRIMERO: Que, a folio 50, la demandada objetó los documentos acompañados por la parte demandante a folios 42, 44 y 45, en razón de las siguientes consideraciones:

1.- Respecto del documento acompañado a folio 44, a saber, "informe técnico", es un informe privado que aparece emitido por terceros ajenos al juicio, quienes no han comparecido en el mismo a reconocer dicho documento, objetándolo en razón de su evidente falta de autenticidad y por no haber sido reconocido en juicio por quien lo emitió en los términos del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, numeral 1. Documento que, al no emanar de su representada, no le puede constar su veracidad e integridad, mientras dichos caracteres no sean establecidos en autos, mediante los medios de prueba que la ley franquea a la demandada para tal efecto. Principio que estaría asentado por la jurisprudencia y en la doctrina procesal que no se puede obligar a una parte a que se tengan por reconocidos a su respecto documentos privados emanados de terceros ajenos al juicio, objeción que, dice estricta relación tanto con el documento en sí mismo como respecto de su valor probatorio.

2.- Objetó los documentos acompañados a folio 45 y, sostiene que la contraria acompañó una serie de certificados enumerados desde el 4 al 6, sin embargo, todos son de hace más de 30 años, desconociendo su autenticidad y veracidad pues no guardan relación con el pleito sometido a conocimiento del tribunal, no acompañando documento alguno que dé cuenta que la propiedad al año 2019 cumplía o no, con la normativa eléctrica vigente, establecida por la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Asimismo, los documentos señalados en los numerales 2, 3 y 7, estos son, pago de patente y facturas, los cuales igualmente objeta por falta de veracidad y autenticidad, pues de su



simple lectura dan cuenta que tienen una data de más de 25 años, además fueron otorgados en favor de un tercero ajeno al juicio., razón por la que objeta todos los documentos acompañados a folio 45 en razón de su evidente falta de autenticidad y por no haber sido reconocido en juicio por quien lo emitió en los términos del artículos 346 del Código de Procedimiento Civil, numeral 1.

Precisa sobre las objeciones de los documentos objetados de folios 44 y 45, que todos ellos se contradicen con los que su parte acompaña en un otrosí, y que fueran firmados por los propios demandantes de autos, pues demuestran que los mismos no sólo cobraron un seguro por los daños ocurridos en la propiedad sino que también presentaron declaración jurada de los enseres siniestrados y lo que en ningún caso tenían relación con una "Casa de Pensión", recordando que el solo hecho de otorgársele una patente comercial en el año 1993 a la propiedad, no significa en lo absoluto que al día de hoy ella siga vigente y que, la contraria no acompaña la declaración de instalación eléctrica interior, que entrega la SEC, lo que reafirma la hipótesis de una responsabilidad exclusiva del demandante.

3.- En cuanto a los documentos acompañados a folio 42, objetó el signado con el número 4, por ser emitido en favor de un tercero ajeno a este juicio y además por cuanto de su lectura, se desprende que no guarda relación con hechos diversos a los contenidos en estos autos.

4.- Aquellos documentos acompañados a folio 43, del cual se cumplió a folio 47, los objetó en razón de su evidente falta de autenticidad y por no haber sido reconocido en juicio por quien lo emitió en los términos del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, no pudiendo constatar la veracidad de que el inmueble de



pasaje Punta Angamos N°740, Mejillones, se encuentre en la situación descrita, pues a dicha fecha la contraria cobró lo seguros pertinentes.

Precisa sobre el informe de Bomberos de folio 42 que, es categórico al concluir que el incendio fue de carácter accidental, así como también es tajante al señalar: "*Que los automáticos de protección de energía no operaron, que el automático del interior de la vivienda no se pudo precisar su capacidad de Amper debido a su destrucción por efecto del fuego*", agregándose que: "*el automático del medidor de la entrada de la vivienda estaba sobre dimensionado y que la tapa del medidor no contaba con su seguro, el cual solo puede ser removido por la empresa de distribución eléctrica*". Es decir, la protección del empalme fue manipulada y cambiada por una de mayor capacidad con la finalidad de poder aumentar el consumo interior de la propiedad, que normativamente no está permitido, ya que la protección se define en base una cierta potencia, para la cual están dimensionados los conductores de la instalación, por ende el sobredimensionar o aumentar la capacidad de la protección sin antes tener declarada la instalación por un instalador autorizado ante la SEC, pone en un grave riesgo de incendio por calentamiento de conductores o por cortocircuitos la propiedad.

SEGUNDO: Que, a folio 77 la parte demandante evacuó el traslado conferido respecto de la objeción de documentos promovida por la contraria y señala lo siguiente:

1.- En lo que respecta a la objeción del informe técnico sostiene que, la misma debe ser rechazada atendido a que el mismo es el "Informe Técnico de Evaluación de Daños y Presupuesto Estimativo de Obras", respecto del inmueble ubicado en Pasaje Angamos 940, comuna de



Mejillones, elaborado por el Arquitecto Alejandro Gómez Yoma, el cual fue efectivamente fue reconocido en juicio por el citado Arquitecto y confirmada su autoría, en calidad de testigo, cumpliendo a cabalidad con lo dispuesto por el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil.

2.- Sobre la objeción de los documentos acompañados a folio 45, números 4 al 6, y números 2, 3 y 7, alega que la misma debe ser rechazada, por cuanto su naturaleza jurídica corresponden a instrumentos públicos emanados de instituciones públicas, regidas por el Derecho Público, enmarcándose precisamente en la definición del artículo 342 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto a su naturaleza de instrumento público; por lo que, ante la falta de autenticidad alegada, señala que cuando un instrumento adolece de la misma ello ocurre cuando no ha sido suscrito por las personas que aparecen haciéndolo, o no ha sido otorgado por el funcionario que aparece autorizándolo, y que, de la presentación de la demanda se puede ver que los demandantes, hermanos "Pool-Baltra", son hijos de doña Graciela Baltra de la cual heredaron el inmueble siniestrado, quien figura suscribiendo los instrumentos públicos objetados, conjuntamente con los funcionarios municipales y de Servicio de Impuestos Internos por corresponder las facturas número 7 a instrumentos tributarios, documentos todos que dicen relación la situación del inmueble, y no, de doña Graciela Baltra Gallardo, debiendo la demandada probar la falta de autenticidad que sostiene.

3.- En relación a la objeción recaída en el documento número 4 de folio 42, a saber, "Carta remitida por Compañía General de Electricidad CGE, al Abogado Regional del SERNAC, Rodrigo Santander, de fecha 30 de mayo de 2019, Ref. Caso SERNAC N°R2019d983558, cliente N°9238248", puesto



en conocimiento de la contraria, no alegó su falsedad o falta de integridad dentro de plazo. En vez de ello, objetó el documento por causal no contemplada en la ley, siendo un documento emanado de la propia demandada. Documento que guarda absoluta y total relación con los hechos del presente juicio, toda vez que dicho documento da cuenta de modo irrefutable, de la indemnización otorgada y pagada al testigo señor Cesar Luis Irigoyen Vallejos por parte de la demandada, por los artefactos electrodomésticos de su propiedad, confirmado por el mismo en prueba testimonial de folio 73.

4.- Respecto a la objeción de los documentos acompañados a folio 43, esto es, el Acta Notarial de fecha 31 de mayo de 2019, aduciendo falta de autenticidad por no haber sido reconocido en juicio por quien las emitió, sostiene que la misma debe ser rechazada, toda vez que, dicho documento fue otorgado por un Notario, quien detenta la calidad de ministro de fe pública, con facultades dentro de las cuales se encuentra, el de dar a las partes interesadas los testimonios que pidieren.

TERCERO: Que, respecto a la objeción del documento acompañado a folio 44, a saber, "Informe Técnico Inmueble siniestrado ubicado en Avenida Angamos N°940, en la comuna de Mejillones", elaborado por don Alejandro Gómez Yoma, Arquitecto, habida consideración que el mismo ha comparecido en autos a prestar declaración, según consta en acta de prueba testimonial incorporada al expediente digital a folio 73, quien reconoció ser el autor del citado documento, no podrá prosperar, razón por la cual se dispone su rechazo, tal como se indicará.

En lo que respecta a la objeción del resto de los documentos acompañados por la parte demandante, a saber, aquellos incorporados a folio 42, 45, 43 y 47 de la carpeta



digital, en contra de los cuales se alega su falta de autenticidad y no haber sido reconocidos en juicio por quien lo emitió, considerando que no hay medios de prueba ni documentos a fin de acreditar su falsedad, documentos todos que contienen datos e información susceptible de ser analizada, a fin de determinar el mayor o menor poder de convicción que tienen los referidos medios de prueba, por ser una facultad privativa de los jueces del fondo a la época de ponderar la prueba rendida, se rechazará la objeción deducida en autos, sin costas.

II.- EN CUANTO A LA TACHA FORMULADA POR LA PARTE DEMANDADA EN RELACION CON EL TESTIGO DON PATRICIO IVAN VALENZUELA PRAT.

CUARTO: Que la parte demandada, tachó al deponente antes referido, en virtud de las causales contempladas en el artículo 358 N°6 y N°7 del Código de Procedimiento Civil.

QUINTO: Que, la parte demandante evacuó el traslado conferido y solicita que las inhabilidades sean rechazadas atendido a que no se configuran los presupuestos de los numerales del artículo referido.

SEXTO: Que las causales de tacha contempladas en el artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, pretenden resguardar la imparcialidad que debe tener el testigo al momento de declarar en juicio. En este sentido, la causal del numeral 6, a saber, carecer de imparcialidad necesaria por tener interés directo o indirecto en el pleito, de las declaraciones vertidas por el testigo, no se debela el interés "económico", como lo ha definido la jurisprudencia en relación con la causal en análisis, pues el mismo fue enfático en responder, que no tiene interés en que los actores "ganen" el presente juicio, razón por la cual no cabe sino rechazar la inhabilidad tal como se dispondrá.



SÉPTIMO: Que, en relación a la causal de artículo 358, número 7 del Código de Procedimiento Civil, ésta es, tener íntima amistad con la persona que los presenta o enemistad respecto de la persona contra quien declare, se desprende que el deponente a la pregunta relativa de si son amigos, responde que "sí, somos vecinos", dejando en claro que si bien tiene un vínculo con la parte demandante, el mismo obedece a uno en carácter vecinal, más no en los términos definidos en la propia norma, esto es "íntimo", razón por la cual también se rechazará la inhabilidad tal como se indicará.

III.- EN CUANTO A LA TACHA FORMULADA POR LA PARTE DEMANDADA EN RELACION CON EL TESTIGO DON ADALBERTO QUINTERO QUINZACARA.

OCTAVO: Que la parte demandada tachó al deponente antes referido, en virtud de la causal contemplada en el artículo 358 N°6 del Código de Procedimiento Civil.

NOVENO: Que, la parte demandante evacuó el traslado conferido y solicita que la inhabilidad sea rechazada atendido a que no se configuran los presupuestos del numeral del artículo referido.

DÉCIMO: Que, la causal en cuestión dice relación con el interés directo que supuestamente tendría el testigo que, según la Jurisprudencia de nuestros tribunales, debe ser patrimonial o económico, es decir, si el testigo va a obtener o no dinero, en caso que la parte que lo presente gane el litigio.

Desde esa óptica, en el caso en cuestión, la tacha no se encuentra suficientemente fundada, como lo exige el artículo 373 inciso final del Código de Procedimiento Civil, por cuanto no se evidencia que el testigo obtendrá una ventaja pecuniaria que dependa del resultado del pleito, toda vez que, de su declaración se desprende que el



interés manifestado dice relación con el patrimonio perdido por los demandantes (Sra. Pool), no por la recepción de su parte de algún beneficio o retribución de carácter económico, por lo que se desechará la tacha deducida, sin costas, según se dirá en lo resolutivo de este fallo.

IV.- EN CUANTO AL FONDO DE LA ACCIÓN DEDUCIDA:

UNDÉCIMO: Que, en autos ha comparecido don **Miguel Zepeda Pinto**, Abogado, en representación de doña **Isabel Margarita Pool Baltra**, doña **Mirian del Carmen Pool Baltra**, doña **Aracelly de Lourdes Pool Baltra**, doña **Juana Luisa Pool Baltra**, don **Vladimir Leonardo Pool Baltra**, y de don **Juan Carlos Pool Baltra**, quien de conformidad a lo dispuesto en los artículos 2314 y siguientes del Código Civil, artículo 139 de la Ley General de Servicios Eléctricos y artículo 107 del Decreto Supremo N°327 del Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos, deduce demanda de indemnización de perjuicios por daño emergente y daño moral, en contra de la empresa **Compañía General de Electricidad o "CGE"**, representada por don **Cristián Gómez Díaz**, Gerente Zonal, y solicita acogerla en todas sus partes, condenándola al pago de indemnización por daño emergente por la suma de \$300.000.000.-, y al pago de indemnización por daño moral por la suma total de \$180.000.000.-, más intereses y reajustes, o la suma que el Tribunal estime de justicia y equidad, con expresa condena en costas.

DUODÉCIMO: Que, a su turno la parte demandada, **Compañía General de Electricidad, CGE S.A. y/o CGE**, ha comparecido en autos, representada por don **Francisco Leppes López**, Abogado, contestó la demanda de autos y solicitó su rechazo, con costas. En primer término realiza una defensa negativa general de los hechos expuestos en el libelo de la demanda, indicando además que, la misma a través del



régimen de responsabilidad demandado no puede prosperar, toda vez que, se ha interpuesto demanda en sede de responsabilidad extracontractual, en circunstancias que se debió demandar en sede contractual.

En subsidio, alega exoneración de responsabilidad civil, por culpa exclusiva de la víctima. En subsidio, rebaja de indemnización de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2330 del Código Civil.

Por último, en subsidio, en el evento de que el Tribunal considere que en la especie la acción de indemnización de perjuicios se pudiera resolver aplicando las reglas de la responsabilidad contractual y no extracontractual, en base a las alegaciones opuestas, solicita el rechazo de la demanda de autos y, finalmente en subsidio de todo lo anterior, en el evento de rechazarse todas las alegaciones y defensas, y se considere que, se debe otorgar una indemnización en favor de los demandantes, solicita la rebaja de la misma en la cantidad de 200 UF, que corresponden al pago de seguros y que fueron efectivamente pagados a los actores.

DÉCIMO TERCERO: Que, la parte demandante con la finalidad de acreditar sus asertos, se valió de los siguientes medios de prueba:

I.- DOCUMENTAL:

1).- Certificado de inscripción de herencia de fecha 4 de julio de 2019, fojas 205, N°198, correspondiente al año 2019, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Mejillones.

2).- Certificado de reinscripción de herencia de fecha 12 de junio de 2019, fojas 183, N°178, correspondiente al año 2019, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Mejillones.



3).- Certificado de hipotecas y gravámenes del inmueble inscrito a fojas 183, N°178, y a fojas 205, N°198, ambas del Registro de Propiedad del año 2019, del Conservador de Bienes Raíces de Mejillones.

4).- Informe de Investigación de Incendio N° INC 005/2019, de fecha 03 de Mayo de 2019, elaborado por el Departamento de Estudios Técnicos del Cuerpo de Bomberos de Mejillones.

5).- Respuesta aclaratoria mediante oficio N°017/2019, de parte del Cuerpo General de Bomberos de Mejillones a doña Carmen Castillo Rivera, Fiscal Adjunto Fiscalía Local de Mejillones, de fecha 17 de Mayo de 2019.

6).- Parte denuncia N°355, Sistema de información y atención a usuarios SIAU, Ministerio Público, Fiscalía Local de Mejillones, de fecha 20 de abril de 2019.

7).- Carta remitida por Compañía General de Electricidad, al abogado regional del SERNAC, Rodrigo Santander, de fecha 30 de Mayo de 2019, Ref. Caso SERNAC, N°R2019D2983558, cliente N°9238248, Cesar Irigoyen Vallejos.

8).- ""Informe Técnico Inmueble siniestrado ubicado en Avenida Angamos N°940, en la comuna de Mejillones"", elaborado por don Alejandro Gómez Yoma, Arquitecto.

9).- Ejemplar del periódico La Estrella de Antofagasta, de fecha lunes 22 de Abril 2019, N°15.164, portada y página 4.

10).- Comprobante de pago ingresos municipales N°765, Municipalidad de Mejillones, de fecha 7 de junio de 1993, por concepto de Certificado de Recepción Municipal, domicilio Pasaje Angamos N°940.

11).- Solicitud de patente Municipalidad de Mejillones, giro casa de pensión, domicilio Pasaje Angamos N°940, de fecha 9 de junio de 1993.



12).- Certificado de Recepción Municipal N°017/1993 de patente en Pasaje Angamos N°940, Municipalidad de Mejillones, Departamento de Obras Municipales, de fecha 4 de junio de 1993.

13).- Certificado de Dotación de Servicios N°023, Empresa de Servicios Sanitarios de Antofagasta S.A., propiedad Pasaje Angamos N°940, Mejillones, de fecha 4 de agosto de 1993.

14).- Certificado de Urbanización N°16/90, Municipalidad de Mejillones, Departamento de Obras, de la vivienda ubicada en Pasaje Angamos N°940 Mejillones, de fecha 28 de septiembre de 1990.

15).- Set de facturas, números 00001, 00002, 00003, 00004, 00005, 00006, 00007 y 00008, casa de pensión y alojamiento Pasaje Angamos N°940, Mejillones, RUT 4.150.294-0.

16).- Acta Notarial suscrita por don Claudio Andrés Salvador Cabezas, Notario, Conservador y Archivero Judicial, Mejillones.

II.- TESTIMONIAL:

A folio 73, compareció don Alejandro Jorge Gómez Yoma, quien previamente juramentado declaró que, es el autor del informe que se le exhibe, a saber, "Informe Técnico inmueble siniestrado ubicado en Avenida Angamos N°940, Mejillones", acompañado al proceso a folio 44. Luego, en relación con el punto N°1 de la interlocutoria de prueba, señala que se le solicitó hacer una evaluación técnica del cual sería el estimativo de reconstruir la casa en las condiciones que estaba, acudiendo al lugar, viendo las condiciones en la que estaba y mediante planimetría procedió a efectuar una simulación de un proyecto de la casa en condiciones de cómo debería estar originalmente. Elaboró un informe de planimetría base, considerando planos



de alcantarillado, y concluyó todo lo que significaría, demoler, pagar los derechos, comprar mobiliario. Acota que, se trató de hacer una simulación lo más cercano a demoler, construir y equipar el inmueble en las condiciones que estaba, arrojando un valor de \$300.444.000. Agrega que, hoy por hoy las condiciones son más desfavorables en términos de costo por lo que el valor estimado tendería a aumentar.

Condujo a estrados a don Cesar Luis Irigoyen Vallejos, quien debidamente juramentado sobre el punto N°1 de prueba, declaró que todos viven cerca en el sector y en la fecha mencionada hubo un incendio en la casa referida, debido a un corto circuito en la red eléctrica, lo que le consta por haber sufrido él, el mismo día, el daño de dos televisores y una lavadora, los cuales estaban en buen estado, levantando el problema con la compañía eléctrica, quien validó lo ocurrido por un alta de voltaje facilitándole el dinero para poder adquirir nuevamente los artefactos, siendo indemnizado. Añade que, según lo comentado por los vecinos, en el domicilio siniestrado no se encontraba nadie.

A las contrapreguntas, sostiene tener entendido que a la familia en cuestión no se le ha indemnizado, desconoce los valores de los daños alegados, pero que si hubo tales, pues la casa quedó en nada, perdiendo derechamente todo.

En lo que respecta al punto N°3, señala que él vive en el sector y la compañía eléctrica nunca le ha hecho mantención al medidor, solo van a tomar la lectura de la energía consumida, pero en cuando a mantención de la casa siniestrada lo desconoce, al menos en su casa no. Sostiene que la mantención debiera realizarse al menos una revisión anual. Responde que, el responsable de las instalaciones interiores eléctricas de una propiedad le corresponde a cada propietario, precisando, a la pregunta desde dónde la



instalación eléctrica es responsabilidad del dueño de la propiedad, desde el empalme es de la compañía eléctrica y el medidor también, el cual no se puede llegar y cambiar. Finalmente sobre el punto N°5, indica que la casa estaba vacía, por lo que, algún habitante de la propiedad que haya hecho algo indebido lo considera poco probable.

Igualmente, compareció a prestar su declaración el testigo don Patricio Iván Valenzuela Prat, quien señaló que el suceso fue un incendio que generó pérdida total, por causa de los cables de electricidad, el cual se produjo a las 12 a 13:00 horas, momento en el que estaba en su hogar y advirtió el inmueble siniestrado, sus luces comenzaron a parpadear, por lo que inmediatamente cortó la luz de su casa. Luego se produjo un golpe de corriente y se generó el incendio, chispazos que habrían comenzado a las 11:00 horas. Indica que vive en el sector, en el mismo pasaje, y que no tuvo problema eléctrico, pero su habitación se quemó a la mitad atendido el incendio generado. Esgrime, en lo relativo al punto N°2 de prueba, que los actores sufrieron pérdida total, lo que le consta porque quedaron solamente con los cementos parados. Agrega que, jamás se ha hecho mantención a los medidores, tampoco se ha efectuado en su casa y que, en la casa siniestrada no había nadie, lo que le consta porque es vecino, reafirmando que no había nadie.

Por último, conduce a estrados a don Adalberto Quintero Quinzacara, quien previamente juramento prestó su declaración, señala en lo relativo al punto N°1 de prueba que, él fue la persona que hizo la llamada telefónica a la empresa eléctrica en el momento, atendido a que su casa se encuentra ubicada frente al pasaje aldea y dicho sector tiene una ventana que ven los postes que están ubicados en el sector y que, cercano al medio día, refiere haber sentido fuertes estampidos y los cables comenzaron a



"cueteear" lo cual ya había acontecido en ocasiones anteriores. Luego efectuó una llamada a la empresa y posteriormente nuevamente se produjo un estampido mayor, motivo por el cual la empresa acoge el llamado, advirtiéndole que la gente corrió alarmada por las calles.

En cuanto a los daños alegados que reclaman los demandantes, indica que sí se produjeron los mismos. Dice no saber quien vivía en la casa al momento del siniestro, sólo sabe que la casa es de la parte demandante y que la misma estaba habitable a la fecha del siniestro. Por último en lo que respecta al punto de prueba N°4, señala desconocer tal situación.

III.- OFICIOS:

Consta a folio 59, oficio referencia R2019D2983558, emitido por SERNAC, suscrito por don Rodrigo Santander Martín, Abogado Regional, en virtud del reclamo formulado por don Cesar Luis Irigoyen Vallejos.

IV.- PRUEBA ADHERIDA:

Consta a folio 78 que, la parte demandante se adhiere a la prueba documental presentada por la parte demandada de folio 50.

DÉCIMO CUARTO: Que, la empresa demandada con la finalidad de acreditar sus asertos, se valió de los siguientes medios de prueba:

I.- DOCUMENTAL:

1).- Copia de Formulario de fecha 14 de junio de 2019 por cobro de seguro "multihogar" respecto de la propiedad de pasaje Punta de Angamos 940, Mejillones, el cual contiene además, declaración jurada de doña Juan Pool Baltra, Parte N° 355 de fecha 20 de abril de 2019, cotización de enseres dañados, inventario de enseres dañados y copia de informe de Bomberos.



2).- Informe de liquidación siniestro 14-318579 de la propiedad de pasaje Punta de Angamos 940, Mejillones.

3).- Copia de recibo de indemnización finiquito cesión y/o subrogación debidamente firmada por Myrian Carvajal Pool por los hechos ocurridos en la propiedad de pasaje Punta de Angamos 940, Mejillones.

4).- Boleta de servicios por el contrato de suministro eléctrico asociado al domicilio de Punta de Angamos 940, Mejillones

II.- OFICIOS:

Que, a folio 86 se incorporó al expediente digital oficio ordinario electrónico N°102408, de fecha 24 de enero de 2022, suscrito por don Iván Alejandro Lillo Silva, Director Regional (S), de Antofagasta, Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

Igualmente, a folio 90, se agregó al expediente electrónico oficio ORD.: N°022/2022, de fecha 05 de enero del 2022, suscrito por doña Daniela Pino González, Director de Obras Municipales (S), Municipalidad de Mejillones.

DÉCIMO QUINTO: Que, en virtud de la medida para mejor resolver decretada por el tribunal, según consta a folio 95, se incorporaron al proceso los siguientes documentos:

1).- Oficio ORD.: N° 24/2022, de fecha 31 de marzo de 2022, suscrito por don Aaron Oliveros Vásquez, Director de Obras Municipales, Municipalidad de Mejillones, a folio 103 del expediente digital.

2).- Oficio ORD. N° 10573/ACC: 30433008/ DOC: 3088023/, de fecha 20 de abril de 2022, suscrito por don Sebastián Leyton Pérez, Jefe División Jurídica, Superintendencia de Electricidad y Combustibles, a folio 105 del expediente digital.

DÉCIMO SEXTO: Que, del mérito de los antecedentes que obran en el proceso, en especial, de los fundamentos tanto



de hecho como derecho expuestos por la parte demandante en el libelo pretensor y las alegaciones de la empresa demandada efectuadas en la etapa de discusión, a juicio de ésta sentenciadora, la imputación que se efectúa a la empresa concesionaria demandada, dice relación su falta de servicio o haber prestado el servicio electricidad de manera deficiente, cuya marco legal lo encontramos en el Decreto con Fuerza de Ley N° 4, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de minería, de 1982, que regula los servicios eléctricos en materia de energía eléctrica. En particular se denuncia la contravención a lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley General de los Servicios Eléctricos, norma que dispone: *"Es deber de todo concesionario de servicio público de cualquier naturaleza mantener las instalaciones en buen estado y en condiciones de evitar peligro para las personas o cosas, de acuerdo a las disposiciones reglamentarias correspondientes."*

En iguales condiciones de seguridad se deberán encontrar las instalaciones de energía eléctrica de uso privado.

Las Infracciones a lo dispuesto en los incisos anteriores serán sancionadas con las multas que establezca previamente el reglamento".

DÉCIMO SÉPTIMO: Que ahora bien, nuestra Excelentísima Corte Suprema de Justicia, en cuanto a la falta de servicio, ha resuelto que resulta aplicable "(...) el Título XXXV del Libro Cuarto del Código Civil y, específicamente, su artículo 2.314, que establece la responsabilidad por el hecho propio, en caso que exista falta de servicio, y los artículos 2.320 y 2.322, que establecen la responsabilidad por el hecho ajeno, si se trata de una falta personal del o de los funcionarios. En efecto, cabe aceptar la aplicación



en Chile, a partir del artículo 2.314, de la noción de falta de servicio. Ésta se presenta como una deficiencia o mal funcionamiento del servicio en relación a la conducta normal que se espera de él, lo que concurre cuando aquél no funciona debiendo hacerlo y cuando funciona irregular o tardíamente, operando así como factor de imputación que genera la consecuente responsabilidad indemnizatoria. Este factor de imputación, al ser reconducido a las normas del Código Civil, determina que la responsabilidad se genera cuando el servicio se presta de forma negligente”.

DÉCIMO OCTAVO: Que, en consecuencia la acción indemnizatoria deducida en autos, mediante la cual los demandantes pretenden hacer efectiva la responsabilidad extracontractual de la demandada, se rige precisamente por las normas contenidas en el Título XXXV del Libro IV del Código Civil, artículos 2314 y siguientes, normativa legal de la que desprende que los elementos o presupuestos generadores de dicha responsabilidad son: a) Existencia de un hecho doloso o culposo de una de las partes, b) Que ese hecho doloso o culposo ocasione un perjuicio a la otra parte, y c) que entre el hecho doloso o culposo y los perjuicios haya relación de causalidad, eso es, que los daños o perjuicios sean consecuencia directa e inmediata de aquél.

DÉCIMO NOVENO: Que, conforme a las normas reguladoras de la prueba, la carga de la misma según lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil, pesaba sobre los demandantes, debiendo por tanto satisfacerla a fin de lograr el convencimiento de éste Tribunal sobre los hechos alegados.

VIGÉSIMO: Que, del mérito de autos y la prueba aportada por los actores, existen antecedentes que permiten tener por acreditado en el proceso la ocurrencia del



incendio, producto del cual el inmueble ubicado en el Pasaje Angamos N°940 de la comuna de Mejillones, resultó con daños de consideración según el acta notarial aportada por la parte demandante, sin embargo no ha se logrado probar que dicho incendio haya sido provocado por la omisión culposa, que se le atribuye a la Compañía General de Electricidad S.A., en orden a incumplir con la obligación legal de mantener las instalaciones en buen estado y en condiciones de evitar peligro para las personas o cosas, de acuerdo a las disposiciones legales referidas.

En efecto, para acreditar el primero de los elementos señalados en el considerando décimo octavo, debió haberse probado que el hecho ilícito sufrido por parte de los actores, era consecuencia de la omisión negligente de la parte demandada, y no existe de los medios probatorios aportados por los interesados, elementos que acrediten dicha omisión negligente fue la causante del siniestro que afecto la propiedad de los demandantes.

En este orden de ideas, encontramos un instrumento en virtud del cual se trata de probar y atribuir la responsabilidad que se alega respecto de la empresa demandada, y que corresponde al documento individualizado en el número cuatro del motivo décimo tercero de la presente resolución, a saber, el Informe de Investigación de Incendio N° INC 005/2019, de fecha 03 de Mayo de 2019, elaborado por el Departamento de Estudios Técnicos del Cuerpo de Bomberos de Mejillones, que aparece como insuficiente para presumir que el siniestro ocurrió por responsabilidad de la empresa demandada, el mismo no fue reconocido en juicio por quien lo elaboró, y fundamentalmente porque el informe, no es concluyente a la hora de establecer las causas o motivos que generaron el incendio, pues si bien indica que el mismo se inició en un



equipo electrónico de música, el cual se encontraba sobre un mueble de madera ubicado junto a la pared en el sector del living, recibiendo un alza de voltaje, no se puede obviar el hecho de que el mismo informe señala que, los automáticos de protección de energía de la propiedad no operaron, el que se encontraba ubicado al interior de la vivienda y que según el referido informe elaborado por el personal experto en la materia, no pudo precisar su capacidad de amper, atendida su destrucción producto del fuego, mientras que, el automático del medidor a la entrada de la vivienda estaba sobredimensionado y la tapa del medidor tampoco contaba con su seguro, el cual sólo puede ser removido por la empresa de distribución eléctrica.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que en consecuencia, y como se dijera precedentemente, el cúmulo de antecedentes que obran en autos, dan cuenta de la ocurrencia del incendio, sin embargo no se probó que la causa u origen de éste, se debió a la omisión negligente de la empresa demandada. Luego y ante la ausencia de elementos que la acrediten, no es posible sentar bases para presumir la responsabilidad que se le imputa a la demandada, cuestión que eventualmente pudo ser definida a través de un informe o peritaje técnico, tal como se intentó a través de la medida para mejor resolver decretada por el Tribunal, respecto del cuál las partes nada señalaron a la época en que el profesional perito manifestó la aceptación legal del cargo y fijó sus honorarios, lo que en definitiva se tradujo en la carencia de medios de convicción, destinados a probar el punto N° 1 de la sentencia interlocutoria de prueba, referido a las causas y circunstancias del siniestro que afectó a la propiedad.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, en virtud de lo razonado en los motivos precedentes, la demanda deberá ser rechazada,



resultando innecesario adentrarse sobre la prueba y el análisis de los perjuicios que dicen haber sufrido los actores, atendido a que dicha indemnización resulta improcedente, por no haberse acreditado el primer presupuesto de la responsabilidad denunciada a la empresa demandada.

VIGÉSIMO TERCERO: Que, no se condenará en costas a la parte demandante, por estimar que tuvo motivo plausible para litigar.

Por estas consideraciones y vistos además lo dispuesto en los artículos 144, 160, 161, 162, 170, 174 a 180, 254, 341 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, 1437, 1698, 2314 y siguientes, 2320 y 2322 del Código Civil; **se declara:**

I.- Que, **se rechaza**, la objeción documental promovida por la parte demandada a folio 50 del expediente digital.

II.- Que, **se rechazan**, las tachas formuladas por la parte demandada, respecto de los testigos, don Patricio Iván Valenzuela Prat y don Adalberto Quintero Quinzacara, cuya acta de prueba testimonial consta a folio 73 del expediente digital.

III.- Que, **se rechaza** la demanda interpuesta por don **Miguel Zepeda Pinto**, Abogado, en representación de doña **Isabel Margarita Pool Baltra**, doña **Mirian del Carmen Pool Baltra**, doña **Aracelly de Lourdes Pool Baltra**, doña **Juana Luisa Pool Baltra**, don **Vladimir Leonardo Pool Baltra**, y de don **Juan Carlos Pool Baltra**, en contra de la empresa **Compañía General de Electricidad S.A.**

IV.- Que cada una de las partes pagará sus costas.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol C-4118-2019



Dictada por doña **Elizabeth Verónica Araya Julio**, Juez Titular.

En Antofagasta, a veintiocho de junio del año dos mil veintidós, se anotó en el estado diario la presente sentencia de acuerdo a lo previsto en el artículo 162 inciso final del Código de Procedimiento Civil.



